

Equilibrar las pensiones en 2053 requerirá 24 millones de inmigrantes

El Banco de España pone en duda los ahorros esperados por el Gobierno con el retraso voluntario de las jubilaciones

ANTONIO MAQUEDA
Madrid

El Banco de España hace una llamada de atención sobre el reto de las pensiones. Ni la llegada de inmigrantes, ni las subidas de cotizaciones, ni los incentivos a demorar la jubilación serán suficientes por sí solos para abordar un problema de "extraordinaria envergadura" y "uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años", señala en su informe anual publicado ayer. En España, además, el envejecimiento será incluso más acusado que en otros países: haría falta que en 2053 se triplicaran las previsiones que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre los extranjeros residentes para que pueda permanecer igual la relación entre el número de personas en edad de trabajar y el de pensionistas. Para dentro de tres décadas, el INE espera que en España haya 14,8 millones de pensionistas, 18 millones de nacionales en edad de trabajar y 12 millones de extranjeros activos. Con estas cifras, la proporción entre ocupados y jubilados se estrecharía mucho. Así que para mantener la tasa de dependencia actual, situada en el 26%, el Banco de España explica que la población inmigrante trabajadora tendría que subir en más de 24 millones hasta un total de 37 millones. Habría bastantes más trabajadores foráneos que españoles. E implicaría que se tendrían que crear durante treinta años unos 800.000 puestos de trabajo anuales solo para acoger estas llegadas.

Con más de un 17% de los residentes nacidos fuera, España ya está entre los cuatro países del mundo con una mayor proporción de extranjeros tras Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. A la luz de estos números y a pesar del elevado dinamismo de los flujos migratorios hacia España, "no parece probable que la inmigración pueda evitar el proceso de envejecimiento en el que se encuentra inmerso nuestro país", concluye. Por otra parte, aunque contribuyen de forma decisiva a paliar la escasez de mano de obra, los inmigrantes no presentan la formación de los nacidos en España y no servirían en esa medida para responder a las necesidades que creará la transformación tec-



El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. PABLO MONGE

El dato

11.000

millones es el aumento de la recaudación por IRPF que el Banco de España atribuye a la inflación en el período comprendido entre 2019 y 2023.

nológica, alerta el organismo que dirige el gobernador Pablo Hernández de Cos.

El organismo supervisor también cuestiona las proyecciones del Gobierno y de la Comisión Europea sobre la partida de pensiones: en primer lugar recuerda que los desembolsos en prestaciones siempre han superado las cifras que se preveían y que, en consecuencia, estas se han estado revisando continuamente al alza.

Y, por otro lado, cuestiona directamente una de las principales medidas de ahorro que ha planteado el Ejecutivo y que ha aceptado Bruselas como buena: los incentivos para demorar de forma voluntaria la jubilación más allá de la edad legal. Los cálculos del Gobierno sostienen que en 2050

el gasto puede bajar en unos 1,4 puntos de PIB porque la mitad de los trabajadores van a retrasar por voluntad propia su retiro durante tres años. El Banco de España ni siquiera cuestiona el número de ciudadanos que vayan a posponer su jubilación, que ha aumentado desde el 4% al 8% de las jubilaciones en los últimos años y que, por lo tanto, dista mucho del 50% de ellas. Respecto a esto, el supervisor simplemente afirma que hay mucha incertidumbre sobre cuántos retrasarán su retiro.

Efecto limitado

Pero lo que sí pone en duda es la cifra de ahorros que se pueden obtener tomando la muestra de vidas laborales de la Seguridad

Social. Con estas apunta que el ahorro podría ser bastante más reducido: al menos la mitad de lo que calcula el Ejecutivo, en parte porque después tendrían que pagarles más prestación por los incentivos. Estos consisten en un 4% más de pensión por año demorado o una cifra bastante menor en un solo desembolso. Por cada año que se logre posponer la jubilación, el Gobierno calcula un ahorro de nueve décimas de PIB, mientras que el Banco de España lo estima entre dos décimas si todos toman el 4% anual y seis décimas si todos cogen el pago único. En consecuencia, en lugar de la mitad de los trabajadores, todas las altas ordinarias tendrían que producirse tres años más tarde tomando el pago único para acercarse a la cifra de ahorro esperada por el Gobierno. Si un porcentaje importante tomara el 4% anual como sería lógico, el ahorro acabaría siendo bastante inferior. "Tendría un efecto limitado en la reducción del gasto en pensiones", asegura el gobernador Pablo Hernández de Cos en la presentación del informe.

Como ha argumentado otras veces, la institución recuerda que la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 ha aumentado las obligaciones de gasto sin elevar en la misma medida los ingresos. Y apunta que en 2025, con una alta probabilidad, se pondrá en marcha la cláusula de revisión de las pensiones que impuso Bruselas. Esta obliga a que, si no se acuerdan otras medidas alternativas, se tengan que subir las cotizaciones por valor de la desviación prevista en el gasto. Sin embargo, el Banco de España desaconseja tomar la vía de subir las cuotas sociales; según sus estimaciones, por cada punto que suban las cotizaciones se pierde un 0,25% del empleo al cabo de cuatro años. Unos 50.000 trabajos por cada punto. La reforma aprobada ya contempla una subida de casi tres puntos sin poner en marcha la cláusula de revisión de 2025. Podría ser perjudicial para el empleo, la competitividad de la economía y tener consecuencias sobre la equidad intergeneracional, afirma el supervisor.

Por este motivo, propone analizar alternativas a las alzas de cotizaciones. Y entre ellas pone sobre la mesa evaluar las llamadas tasas de reemplazo. O lo que es lo mismo: cuánto porcentaje de su salario se lleva el trabajador a su pensión. Esta es una medida de la generosidad del sistema y es una cifra que se encuentra en cotas superiores a la media de los países del entorno, apunta el Banco de España. Rebajarla supondría un recorte de la pensión inicial pero ayudaría a la sostenibilidad del sistema. También reclama que se examine la evolución del ahorro privado y su capacidad para completar el sistema público de prestaciones. En definitiva, pide tocar todas las piezas para poder afrontar el reto.

Por otra parte, el gobernador Pablo Hernández de Cos ha puesto el énfasis en la necesidad